

**E**l artículo adjunto fue publicado en *South Eastern Latin Americanist* (hoy *The Latin Americanist*, publicada por Southeastern Council on Latin American Studies/Wiley Periodicals, Inc). Fue galardonado con el Premio *Sturgis Leavitt* (SECOLAS, 2002). Su referencia bibliográfica es la siguiente:

RODRÍGUEZ CORDERO, Juan Carlos.

“(Re)equilibrios políticos en Costa Rica: El Poder Constituyente y el Control de Constitucionalidad”. En: *South Eastern Latin Americanist*, Vol. XLV, N° 3-4, invierno/primavera de 2002, pp. 15-28 (Univ. of Central Florida-SECOLAS).

# **(RE)EQUILIBRIOS POLÍTICOS EN COSTA RICA: EL PODER CONSTITUYENTE Y EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.**

*Juan Carlos Rodríguez Cordero.*<sup>1</sup>

El hecho de que la estabilidad del sistema político costarricense resulte ser la más longeva de América Latina, hace que su diseño institucional sea del mayor interés para los estudiosos de la política (Sartori, 1994, pp. 91–100); empero es poco lo que se ha investigado sobre las formas de control del Poder Judicial al Poder Legislativo, en especial sobre el control de la función constituyente. Los estudios politológicos se han centrado en los temas electorales, así como en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y no tanto en las relaciones de éstos con el Poder Judicial (Lehoucq, 1997; 1998); lo cual es, sin embargo, explicable en razón del mayor peso de aquellas dos ramas del poder político en Costa Rica.

En reconocimiento de lo anterior, aquí se analiza –por una parte– el *poder constituyente*; tanto en sus antecedentes como en su configuración actual, enmarcado en el sistema político costarricense.<sup>2</sup> Por otra parte, luego se analiza de manera similar el *control*

---

<sup>1</sup> Juan Carlos Rodríguez Cordero, LL.B., LL.L., B.Pol.Sci., M.Sc., Universidad de Costa Rica. P. O. Box 1619–1250. Escazú. San José, Costa Rica [<http://www.geocities.com/exergo/jcrc.htm>; [exergo@law.com](mailto:exergo@law.com)]. Este artículo ofrece una versión modificada del capítulo III de la investigación: Rodríguez Cordero, Juan Carlos (2001). *Las reformas constitucionales en el diseño del sistema político costarricense: el caso de la consulta preceptiva de constitucionalidad (1989–1997)*. Tesis para optar al grado académico de Magister Scientiae en Ciencias Políticas. San José, C. R., Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, Programa de Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas, 211 pp. Hay edición publicada [bajo el mismo título] por: Bell & Howell Information and Learning–UMI, Ann Arbor, MI., 2002, 211 pp.

<sup>2</sup> El poder constituyente y el control de constitucionalidad, como elementos institucionales, son parte del contenido del sistema político, según las definiciones que dan los especialistas (Alcántara Sáez, 1994, p. 53; 1990, pp. 149–162); pero además están expuestos a las demandas provenientes de los ciudadanos ya en forma individual u organizados.

*de constitucionalidad* en Costa Rica, el cual ha estado relacionado directamente con las atribuciones del poder constituyente. Como se verá más adelante, ese tipo de control ha pasado paulatinamente de las manos de la rama legislativa a la rama judicial; pero además, y de manera casi excepcional en el mundo, con la creación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo se obliga a consultar aspectos relacionados con sus propuestas de enmienda a la *Carta Magna* al Poder Judicial, por medio de la *consulta preceptiva de constitucionalidad*.

## **EL PODER CONSTITUYENTE.**

La *Constitución de Cádiz* de 1812, por su influencia en los primeros estatutos costarricenses, resulta de mención obligatoria. En ésta, las potestades legislativas se asignan a las Cortes junto con el Rey; pero durante su breve vigencia no se ejercieron. Con respecto al *poder constituyente derivado* (o poder reformador de la propia constitución), los españoles de entonces optan por un procedimiento sumamente rígido, sin posibilidad alguna de revisión durante los primeros ocho años de vigencia del texto constitucional (Jiménez, 1992, p. 45; Sáenz Carbonell, 1985, pp. 86–115).

Una vez llegada la independencia del reino español a la provincia de Costa Rica, el 12 de noviembre de 1821 se instala en el Ayuntamiento de Cartago la *Junta de Legados de los Pueblos*, como primera asamblea constituyente. El día 1º de diciembre de 1821 esta Junta aprobó el *Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica*, el cual por su carácter de *provisional* debía ser posteriormente revisado y sancionado. En opinión de Sáenz Carbonell

(1985, p. 171), dicho texto es solo una adaptación de la Constitución de Cádiz. En el *Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica*, su reforma queda reservada solo a un poder constituyente derivado, llamado *Junta de Electores de los Pueblos*, que efectivamente introduce reformas en 1822 al *Pacto*. Esas reformas incluyen la anexión al Imperio Mexicano. Sin que sea de mayor interés detallar aquí los acontecimientos políticos que lo originaron, lo cierto es que anexados así al Imperio Mexicano, rige para Costa Rica –al menos formalmente– el *Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano* de 1823. Dicho texto, probablemente por su carácter de *provisional*, no dispone procedimiento alguno para su enmienda.

Pasada esa primera experiencia anexionista, en el *Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica*, de 19 de marzo de 1823, el poder constituyente y los poderes constituidos quedan en manos del Congreso Provincial. Este *Estatuto Político* rige solo unos días, pues el 29 de marzo de 1823 ocurre el alzamiento *imperialista* encabezado por Joaquín de Oreamuno. Derrotados los imperialistas por parte de josefinos y alajuelenses bajo el mando de Gregorio José Ramírez, se convoca al Congreso Provincial. El 16 de mayo de 1823 se aprueba el *Segundo Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica*, con el poder constituyente de nuevo en manos de su Congreso. Se dispone la posibilidad de otra anexión, la cual se hace efectiva con la unión a la Federación Centroamericana en octubre de 1823 (Townsend Ezcurra, 1973, pp. 135–145).

Ya unida Costa Rica a las Provincias Centroamericanas, deben distinguirse dos posibilidades de reformas constitucionales: aquellas referidas a la Constitución de la República Federal, y luego las referidas a la Constitución particular de cada Estado, conforme lo previsto en los artículos 28, 199 y 201 de la *Constitución de la República*

*Federal de Centroamérica*. Se diseñan a su vez dos procedimientos para las reformas a la Constitución Federal. Para reformas que no afectaran la “forma de gobierno adoptada” se requiere que la iniciativa emanase del Congreso o bien de cualquier Estado, por medio de su legislatura. La reforma requiere del voto favorable de las dos terceras partes del Congreso y de la aprobación de la mayoría absoluta de los Estados mediante el voto favorable de al menos los dos tercios de sus respectivas legislaturas. Pero si la reforma afecta la “forma de gobierno”, además se requiere de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para que decidiese el asunto.

El Estado de Costa Rica aprueba su *Ley Fundamental del Estado de Costa Rica* de 1825. Este *estatuto local* es de igual modo rígido. No se permiten reformas hasta pasados dos años de su vigencia, y además establece normas pétreas o imposibles de reformar; aunque se establecen otras normas reformables por medio de una ley común. Esta ley tiene poca vigencia, debido al alzamiento de los partidarios de Braulio Carrillo en 1838; sin embargo, su dictadura mantiene vigente la *Ley Fundamental* en la parte que se considerase *oportuna*. En julio de 1838 se convocan elecciones para una asamblea constituyente, con la finalidad de “constituir el Estado”; pero además don Braulio Carrillo emite un decreto para regular la sanción de la nueva Constitución. Esta asamblea decreta, el 14 de noviembre de 1838, la separación del Costa Rica de la República Federal de Centro América. Los demás anhelos políticos no se alcanzan y Braulio Carrillo gobierna como absoluto de 1839 a 1841. El mismo Carrillo dicta el Decreto N° 2 de 8 de marzo de 1841, llamado *Decreto de Bases y Garantías*, arrogándose así las funciones de constituyente. Una vez derrocado Carrillo por Francisco Morazán (setiembre de 1842), éste intenta volver a la ley de 1825. Pero Morazán tiene que entregar el poder a José María Alfaro Zamora, debido a una insurrección josefina.

Don José María Alfaro convoca entonces a una asamblea constituyente, que proclama una nueva *Carta Política* en 1844.

Los siguientes textos constitucionales, de 21 de enero de 1847, 22 de noviembre de 1848, de 27 de diciembre de 1859, de 18 de febrero de 1869, de 7 de diciembre de 1871, con tres períodos de vigencia –incluyendo el último de 1919 a 1948–, y de 8 de junio de 1917; a pesar de breves rupturas del orden constitucional, conservan el poder constituyente originario en la asamblea constituyente y el poder reformador derivado en el órgano legislativo, indistintamente de su composición y estructura.

## **LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1949.**

Finalizados los principales hechos bélicos de 1948, en el Pacto Ulate–Figueres para “definir la situación política” (1° de mayo) se acuerda convocar una asamblea constituyente. La Junta Fundadora de la Segunda República se instala el 8 de mayo y en su segundo decreto deroga la Constitución de 1871 (excepto en cuanto a las garantías y derechos expresamente previstos en el mismo decreto). Luego la *Junta* integra una comisión redactora de su propio proyecto de constitución política y las elecciones para escoger los representantes a la Asamblea Constituyente se realizan el 8 de diciembre de 1948. La Asamblea se instala el 15 de enero de 1949 y el 8 de abril de 1949 los constituyentes rechazan el proyecto de la *Junta*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sin duda, la figura de Rodrigo Facio Brenes ocupa un lugar destacado en la redacción del nuevo *Estatuto Político*; pues logra incorporar en la constitución muchas de las propuestas del proyecto rechazado. Algunas notas sobre el pensamiento de Rodrigo Facio pueden leerse en: Oduber Quirós (1985, pp. 166–167), y Rodríguez Vega (1981, p. 25). Tanto Oduber Quirós como Rodríguez Vega hacen mención especial al influjo del *amauta aprista* Víctor Raúl Haya de la Torre.

La *Junta* también deroga la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el empeño de introducir reformas a la organización de este Poder, especialmente con relación al nombramiento de los Magistrados. Algunas lecturas de los hechos políticos de 1948–1949 consideran que: “[a] diferencia de los otros poderes del Estado, [el Poder Judicial] no experimentó un colapso ni destrucción durante la guerra civil de 1948” (Lehoucq, 1997, p. 43). Esto porque: “[p]ara la constituyente del 49, solamente el poder judicial estaba exento de sospecha” (Dabène, 1992, p. 234). Empero, los actores políticos de esa época opinan de otra manera: “Lo primero que hicimos, como lo dije antes, fue proclamar, desde el primer momento en que asumimos el poder, la absoluta independencia del poder judicial, robusteciéndolo con magistrados de intachable probidad. Los resentimientos de algunos magistrados removidos, posiblemente tienen justificación. En la renovación del personal del Poder Judicial, bien pudimos cometer el error de no hacer una justa apreciación de persona por persona” (Figueres Ferrer, 1987, p. 322). Otro expresidente costarricense, Daniel Oduber, también comenta que antes de 1948 el empleado judicial se encontraba expuesto a los vaivenes de la política (Oduber Quirós, 1985, p. 264). El Secretario de Actas de la Constituyente, Oscar Castro, da cuenta de las críticas de entonces al Poder Judicial y del nombramiento por parte de la Junta de Gobierno de los nuevos Magistrados, sometidos a la ratificación de la Asamblea Constituyente en sus primeras sesiones. (Castro Vega, 1996, p. 61).

El resultado de la Constituyente de 1949 –en lo que aquí interesa– es una versión revisada de la Constitución Política de 1871, con mayores controles, a la cual durante cincuenta años de vigencia se le han introducido múltiples enmiendas. Por esto se habla de una gradualidad en los modelos constitucionales costarricenses, a partir de sus antecedentes

(Gutiérrez Gutiérrez citado por Sáenz Carbonell, 1985, p. 171). En lo que respecta al Poder Judicial, éste es fortalecido con Magistrados prácticamente inamovibles (artículo 158 constitucional) y más tarde provisto con el seis por ciento del presupuesto nacional (Ley N° 2.122 de 22 mayo de 1957, reforma al artículo 177 constitucional), con el propósito de *despolitizarlo*.

En cuanto al Poder Constituyente, al igual que sus antecedentes más inmediatos, el texto constitucional de 1949 asigna el poder reformador derivado a la Asamblea Legislativa, mediante un procedimiento gravoso para su reforma, por lo que este es un texto político *rígido*. El poder constituyente originario es asignado a una asamblea convocada para ese propósito (artículos constitucionales 195–196). Los constituyentes de 1949 en las discusiones sobre este tema expresan opiniones a favor de la rigidez del texto fundamental; para evitar que por medio de las reformas parciales se incorporen enmiendas que –por su contenido– solo deberían estar reservadas al poder constituyente originario. Sin embargo, aparte del respeto al trámite formal establecido en el artículo 195 y de la reforma general reservada a una Asamblea Constituyente, no se disponen en la Constitución Política de 1949 límites expresos para el *poder constituyente derivado*.<sup>4</sup> Tampoco se establece que el texto constitucional finalmente aprobado deba ser consultado mediante un plebiscito, ni siquiera para sus reformas venideras.

---

<sup>4</sup> Don Oscar Castro Vega señala que el temor de algunos diputados constituyentes es que mediante reformas parciales se apruebe una “reforma general”. A juicio del constituyente Juan Trejos, la reforma parcial de 1941 –impulsada por Calderón Guardia– fue más bien una reforma total a la *Carta Política* de 1871 (Castro Vega, 1996, p. 376). En el plano técnico–jurídico se discute sobre el tema de los límites expresos e implícitos del poder constituyente derivado (Hernández Valle, 1993, pp. 143–155).



## **EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ANTES DE 1989.**

Aquí se ofrece una reseña de los distintos mecanismos diseñados para garantizar la vigencia efectiva de la constitución en Costa Rica, con antelación a la reforma política de 1989, que asigna la jurisdicción constitucional especializada a una nueva Sala de la Corte Suprema de Justicia.

Ya se ha mencionado la influencia de la constitución gaditana de 1812 en los primeros textos políticos de Costa Rica. En esa ley del reino español se confía el control de las infracciones constitucionales a las propias Cortes. Las primeras constituciones costarricenses tampoco establecen un sistema de control de constitucionalidad, salvo por algunos mecanismos para exigir la responsabilidad de sus infractores, atribuyéndosele este control al Poder Legislativo. No es sino hasta en 1869 cuando se da un avance significativo en este sentido. La constitución de 18 de febrero de 1869, además de conservar el control en el Legislativo, establece la novedad de que el control pueda ser también ejercido por la Corte Suprema de Justicia. Este es un primer precedente de un sistema de control constitucional concentrado; pero la decisión final pertenecía en todo caso al Congreso. Esta constitución queda derogada en 1870, sin ninguna aplicación del sistema de control de constitucionalidad. Más tarde, la Constitución Política de 1871 vuelve al control constitucional asignado al Congreso; pero la Ley Orgánica de Tribunales de 1887 (vigente a partir del 1° de enero de 1888) establece *paralelamente* un *control difuso*. Tal control indica la inaplicabilidad por parte de los funcionarios judiciales de leyes, decretos o acuerdos contrarios a la Constitución (Sáenz Carbonell, 1991).

A pesar de que en 1938 se encuentra aún vigente la Constitución Política de 1871, heredera del modelo gaditano de control de constitucionalidad por parte del Parlamento, nuevamente se instaura en ese año un sistema *paralelo* al entrar en vigencia el Código de Procedimientos Civiles. Este Código le otorga a la Corte Plena la facultad de declarar, por votación no menor de dos tercios del total de los Magistrados, la inconstitucionalidad de leyes, decretos, acuerdos o resoluciones del gobierno. Las dudas del poco asidero constitucional del sistema se resuelven en 1949, cuando es elevado a rango constitucional por el artículo 10 de la nueva *Carta Magna*.<sup>5</sup> El control de constitucionalidad concentrado se mantiene luego sin cambios hasta 1989.

En opinión de los expertos, el sistema vigente de 1938 a 1989 es claramente deficiente; en especial por las dificultades para obtener en la Corte Suprema de Justicia la votación calificada requerida. Además, la jurisprudencia predominante en esos años parte de la “presunción de constitucionalidad” de las normas (Gutiérrez Gutiérrez, 1993, pp. 200–203).

## **LA REFORMA POLÍTICA DE 1989.**

En el año 1979 se inician los intentos de enmienda al *Texto Político Fundamental* para crear una Sala Constitucional, mediante una modificación al artículo 152 (el proyecto ingresa en la corriente legislativa el 5 de mayo de 1980). En esa oportunidad el Poder

---

<sup>5</sup> Aunque el artículo 10 de la Constitución Política en su redacción original atribuye a la Corte Suprema el control de constitucionalidad de las leyes y los reglamentos del Poder Ejecutivo, también prescribe que: “La ley indicará los tribunales llamados a conocer de la inconstitucionalidad de otras disposiciones del Poder Ejecutivo”. Por consiguiente, al establecerse la jurisdicción contencioso–administrativa, también en 1949, se asigna a estos tribunales del control de constitucionalidad de esas *otras* disposiciones.

Judicial se opone a la reforma a dicho numeral, en particular porque: “los datos estadísticos no abonan a la necesidad de crear un nuevo tribunal por razones de volumen de trabajo, pues durante este año sólo ha entrado un recurso de inconstitucionalidad y se han recibido únicamente once recursos de amparo en la Secretaría de la Corte”.<sup>6</sup> La Corte Suprema de Justicia se opone también al aumento del número de Magistrados; pero se muestra favorable a otros aspectos del proyecto. En todo caso, esta propuesta legislativa no llega prosperar; por lo cual en 1982 una comisión de distinguidos juristas inicia sus trabajos para un nuevo proyecto sobre la jurisdicción constitucional.

El nuevo proyecto de reforma constitucional, que lleva en los archivos legislativos el número 10.401, cuenta con la venia de varios diputados para su trámite (la *iniciativa* del proyecto aparece registrada como del diputado “José Miguel Corrales Bolaños y otros”). Esta propuesta recibe la primera lectura en la sesión del plenario legislativo del día 7 de mayo de 1987. El día 9 de junio de ese mismo año es remitido a una comisión especial que rinde su informe de mayoría el día 30 de junio y recibe su primer debate casi dos años después, el día 25 de abril de 1989. El dictamen afirmativo de mayoría dice que se pretende dar sustento constitucional al proyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 10.401*. Proyecto de ley de reforma a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, p. 183). Paralelamente se tramita el proyecto que originaría la *Ley de la Jurisdicción Constitucional*,

---

<sup>6</sup> Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 8.484*. Proyecto de ley de reforma a los artículos 10, 48, 50, 95 inciso 7), 102 inciso 1), 106, 107, 109 incisos 5), 6) y 7), 110, 111, 112, 113, 117, 119, 121, 124, 128, 131, 132 inciso 5), 152, 157, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, y 185 de la Constitución Política. Folio 41. Este expediente continúa su trámite en cuanto a otras de las reformas propuestas; pero también de manera infructuosa, y se archiva en forma definitiva en mayo de 1995.

N° 7.135 de 11 de octubre de 1989 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 10.273*. Proyecto de ley orgánica de la jurisdicción constitucional).

La reforma propuesta pretende subsanar las debilidades del anterior sistema de control de constitucionalidad, especialmente: la ausencia de una jurisdicción especializada en la materia, también competente para resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, y la eliminación de la votación calificada para declarar las inconstitucionalidades de las normas jurídicas. Inicialmente el proyecto fue dictaminado favorablemente; pero varias mociones incorporadas al texto avivan el debate legislativo. Después de la aprobación por parte de la comisión especial dictaminadora, surgen objeciones al proyecto por parte del Tribunal Supremo de Elecciones y de varios diputados (entre ellos Mireya Guevara y Fernando Volio); por las posibilidades de que ante el tribunal constitucional se impugnen las resoluciones dictadas por el órgano electoral costarricense en materia distinta a “los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en ejercicio de la función electoral”. A pesar de la oposición del tribunal electoral, la Corte Suprema de Justicia se manifiesta a favor de que contra otros actos distintos de la materia propiamente electoral (por ejemplo, las naturalizaciones, inscripciones de matrimonios y cancelaciones de ciudadanía) pueda recurrirse ante la Sala Constitucional que se pretende crear.

Ante la posibilidad de que el proyecto no fuese aprobado, el Poder Ejecutivo anuncia que se darán las negociaciones necesarias para su aprobación, lo cual es confirmado por el Presidente de la República (*La Nación*, martes 23 de mayo de 1989, p. 6 A.; sábado 3 de junio de 1989, p. 4 A.; sábado 3 de junio de 1989, p. 4 A.). Para facilitar

las negociaciones, la última versión del texto contempla que no serán impugnables los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elecciones que realiza el tribunal electoral y los demás que determine la ley; rescatando así las preocupaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. La reforma constitucional se aprueba finalmente en tercer debate el lunes 12 de junio de 1989, con el voto favorable de cuarenta y tres diputados. Los legisladores que votan en contra la enmienda constitucional son los *liberacionistas*: Álex Solís, Alfonso Estevanovich, Ángel Marín, Clinton Cruickshank, Fernando Volio y Mireya Guevara.<sup>7</sup>

Es oportuno recordar que, para aquel entonces, los debates sobre el ascenso de los tribunales constitucionales y la reforma judicial en América Latina eran si acaso incipientes, mientras que el poder judicial costarricense aparecía claramente como más fuerte e independiente que sus referentes más cercanos; por lo que la política local parece explicar de mejor manera la coyuntura que permite la creación de la Sala Constitucional.<sup>8</sup> Por una parte, el Poder Ejecutivo se interesó en reformar el sistema de control de constitucionalidad (Álvarez Desanti, 2000); mientras que la fracción legislativa de oposición vislumbró una opción de participar en la *ampliación* del poder judicial.

---

<sup>7</sup> De los legisladores que votan negativamente la propuesta, Álex Solís justifica su voto diciendo que la Asamblea Legislativa cometió un “grave error” al aprobar la reforma “a sabiendas que las correcciones se tendrán que hacer en el proyecto de ley de Jurisdicción Constitucional”. Además, manifiesta no estar en contra de la creación de la Sala. Por su parte, la diputada Rose Mary Karpinski anuncia que presentará una moción para que la ley de la jurisdicción constitucional (en trámite) diga que: “no cabrá recurso contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos a la función electoral”. Mayorga, Armando (Redactor). “Asamblea aprobó Sala Cuarta”. En: *La Nación*. San José, C. R., martes 13 de junio de 1989, p. 5 A.

<sup>8</sup> El término con el cual comúnmente se le llama en Costa Rica a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es *Sala Cuarta* (*Sala IV*). El Magistrado Piza Escalante narró que: “[E]l apodo de Sala Cuarta nos lo puso el presidente de la Corte, don Miguel Blanco, el día que nos instalamos aquí, el 27 de setiembre de 1989. En ese momento fue como ponernos en nuestro lugar, nos dijo ‘No olviden que hay Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y ustedes son la Sala Cuarta’ [...]”. Piza Escalante, Rodolfo (1999). Magistrado (Presidente) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista realizada por Agüero Rojas. Publicada en: Periódico *Al Día*. San José, C. R., domingo 10 de octubre de 1999, p. 8. Sin ánimo de contradecir al Magistrado Piza (*r.i.p*), agregaríamos que ese fue el *bautizo oficial* por parte del Presidente de la Corte, pues desde el trámite de la reforma constitucional ya la cobertura periodística hablaba de la *Sala IV*.

En el dictamen de mayoría de la comisión que dictamina el proyecto de reforma constitucional, se propone una Sala compuesta por cinco Magistrados; mientras que el proyecto aprobado desaparece el artículo 153 bis y se agrega un transitorio que eleva el número de Magistrados a siete, dos de ellos electos entre los miembros de la Sala Primera de la Corte. Al estar de por medio la viabilidad política de la reforma, los diputados minoritarios aprovechan para asegurarse la participación en la designación de los nuevos Magistrados. Se establece entonces que los jueces de la Sala IV deben ser elegidos por votación no menor de los dos tercios de los miembros del Legislativo, a diferencia de los Magistrados de las *otras* Salas de la Corte Suprema de Justicia. Según afirma el exdiputado Lobo Solera, sin esta modificación al proyecto original personalmente no hubiese votado favorablemente la reforma y opina que difícilmente lo hubiesen hecho sus compañeros de la fracción socialcristiana; pues además de la convicción de dotar al país de una instancia judicial fundamental, en esa coyuntura también se buscaron equilibrios políticos para el nombramiento de los nuevos Magistrados, deseables además para el nombramiento de los *otros* Magistrados de la Corte, del Contralor General de la República y del Defensor de los Habitantes (Lobo Solera, 2000).

Finalmente, el texto legal aprobado<sup>9</sup> asegura los intereses de las fuerzas representadas en el Parlamento; luego de lo cual los diputados empiezan las discusiones para el nombramiento de sus primeros Magistrados. Después de varios días de

---

<sup>9</sup> “ARTICULO 1.- Refórmanse los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, cuyos textos dirán:

“Artículo 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.

Le corresponderá además:

- a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley.
- b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley.”

“Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.”

“Artículo 105.- La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega, por medio del sufragio, en la Asamblea Legislativa. Tal potestad no podrá ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante ningún convenio o contrato, ni directa ni indirectamente, salvo el caso de los tratados, de conformidad con los principios del Derecho Internacional.”

“Artículo 128.- Si el veto se funda en razones de inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que reciba el expediente. Se tendrán por desechadas las disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de ley aprobada por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala declare que no tiene disposiciones inconstitucionales.”

ARTICULO 2.- Rige a partir de su publicación.

TRANSITORIO.- La Sala que se crea en el artículo 10 estará integrada por siete magistrados y por los suplentes que determine la ley, que serán elegidos por la Asamblea Legislativa por votación no menor de los dos tercios de sus miembros. La Asamblea Legislativa hará el nombramiento de los miembros de la Sala dentro de las diez sesiones siguientes a la publicación de la presente ley; dos de ellos los escogerá de entre los miembros de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, cuya integración quedará así reducida.

Mientras no se haya promulgado una ley de la jurisdicción constitucional, la Sala continuará tramitando los asuntos de su competencia, aún los pendientes, de conformidad con las disposiciones vigentes [...].”

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 10.401*. Proyecto de ley de reforma a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política. El texto de la ley aprobada consta a folios 815–818.

negociaciones entre los diputados del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Socialcristiana, el lunes 25 de setiembre de 1989 se escogen los siete Magistrados de la Sala IV.<sup>10</sup>

Complementa la reforma de 1989 la aprobación de la *Ley de la Jurisdicción Constitucional (Expediente N° 10.273)*, que también introduce cambios en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con lo cual otros estrados distintos de la Sala IV no pueden anular normas o actos por razones de constitucionalidad.

Una de las novedades del sistema de control de constitucionalidad es el control preventivo en el caso de reformas constitucionales, mediante el establecimiento de la consulta previa, y de similar manera se dispone para la “aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley”. La consulta de constitucionalidad previa obligatoria es un instituto de origen francés; sin embargo en Francia la consulta al Consejo Constitucional ocurre en los casos de leyes orgánicas, reglamentos de las asambleas parlamentarias, y tratados internacionales; pero no así para proyectos de reforma constitucional (*Ley Constitucional de la República Francesa*, de 3 de junio de 1958, arts. 54 y 61).

---

<sup>10</sup> En opinión de varios legisladores de ese entonces, esta elección fue muy “politizada”. Eso se explica porque los treinta y ocho votos necesarios para la elección de los nuevos Magistrados hacen necesario un acuerdo bipartidista. Inicialmente, la fracción del Partido Liberación Nacional no estaba de acuerdo con el nombre del exdiputado y Magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Rodolfo Piza Escalante, impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana. Por su parte, los legisladores *liberacionistas* desisten del nombre del congresista Fernando Volio Jiménez; pero insisten en los nombres del Ministro de Justicia, y exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora y del Procurador General de la República, Luis Fernando Solano. Vid., Martínez, Mauricio (Redactor). “Comienza integración de Sala Cuarta”. En: *La Nación*. San José, C. R., jueves 7 de setiembre de 1989, p. 6 A. Véase también: Redacción. “Eligieron a magistrados de Sala Constitucional”. En: *La República*. San José, C. R., martes 26 de setiembre de 1989, p. 3 A.



De manera similar sucede en España (Alba Navarro, 1982, pp. 167–182). Algunas constituciones latinoamericanas siguen modelos semejantes, cuando disponen consultas previas de constitucionalidad, por ejemplo: Bolivia (art. 120), Chile (art. 82), Colombia (art. 241), Ecuador (art. 276), Guatemala (art. 272) y Venezuela (art. 336); pero solo en el caso chileno se ha detectado que al Tribunal de esta materia le corresponda además cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de reforma constitucional (de manera facultativa).<sup>11</sup>

Al comparar el proyecto original con el texto aprobado para la reforma a la *Carta Magna* que crea la jurisdicción constitucional, podrá comprobarse que inicialmente no se contemplaba la posibilidad de la consulta de constitucionalidad, ya fuese obligatoria o facultativa. Esta disposición se propone inicialmente mediante una moción presentada al Plenario legislativo por el diputado José Miguel Corrales (18 de abril de 1989). La moción original se retiró para dar paso a otra similar, esta vez avalada por “varios diputados”, que se aprueba –sin mayor polémica– por el Plenario Legislativo el día 25 de abril del mismo año. En la tramitación del proyecto de ley de la jurisdicción constitucional el asunto sí es debatido; pero la mayoría de las inquietudes son apaciguadas, al establecerse que el dictamen de la Sala solo es vinculante si determina que existen trámites inconstitucionales en el proyecto. El asunto es que la Sala Constitucional ha llegado a advertir al Parlamento

---

<sup>11</sup> Las normas constitucionales latinoamericanas citadas corresponden a las versiones en: GEORGETOWN UNIVERSITY y ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Political Database of the Americas [Base de Datos Políticos de las Américas]. Washington, D. C. <[www.georgetown.edu/pdba/](http://www.georgetown.edu/pdba/)>. Un amplio estudio comparativo sobre las atribuciones de los tribunales constitucionales ha detectado, además de los casos de Chile y Costa Rica, la intervención jurisdiccional previa a la aprobación de normas constitucionales en: Moldavia, la República Centroafricana y la Confederación Suiza [para las enmiendas a las constituciones de los cantones helvéticos]. Mavcic, Arne (2001).

sobre otros aspectos “relevantes desde el punto de vista constitucional” de los proyectos; pues así se lo permite la ley.<sup>12</sup> Una vez advertida la Asamblea de aspectos constitucionales *relevantes*, si el Congreso se separase de este criterio, bien podría fundamentarse luego una acción de inconstitucionalidad en los mismos fundamentos de la Sala Constitucional. Sin embargo, este Tribunal puede separarse de sus propios precedentes.

Las resoluciones de la Sala Cuarta, que son inapelables, han provocado reacciones diversas. Algunas críticas hablan de la Sala Constitucional como un superpoder de la República (*La Prensa Libre*, sábado 2 de agosto de 1997, p. 6). Un editorial del mismo periódico *La Prensa Libre* critica aspectos polémicos de ciertas resoluciones de este Alto Tribunal.<sup>13</sup> El debate en Costa Rica ha sido más que prolífico.

---

<sup>12</sup> “Artículo 96.— Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:

a) Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros [...]

Artículo 101. – La Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo y, al hacerlo, dictaminará sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto de vista constitucional.

El dictamen de la Sala solo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.

En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad”. *Ley de la Jurisdicción Constitucional*. Ley N° 7.135 de 11 de octubre de 1989. Artículos 96 y 101.

Hay otros casos de consultas legislativas; pero solo las indicadas en el inciso a) del artículo 96 son obligatorias. La consulta de constitucionalidad en el caso de proyectos de enmienda a la *Carta Política* debe realizarse después de su aprobación en primer debate en la primera legislatura y antes de la aprobación en la segunda legislatura.

<sup>13</sup> “Es muy probable que la mayor parte de las resoluciones de los magistrados constitucionales estén [...] apegadas a la letra de las leyes, interpretada con un criterio más legalista que moral, pero en otras muy frecuentes dan la impresión de estar creando su propio ordenamiento jurídico, con el mismo talante subjetivo y casuístico de los dioses del Olimpo griego. [...] Lo que no es admisible es que por la mentada razón o por cualesquiera otras, la Sala Cuarta emita resoluciones como la del acceso a la nacionalidad costarricense de los hombres casados con mujeres del país, [...] o como la de ordenar la libertad de delincuentes atrapados con las manos en la masa, o como la reciente del caso del Banco Anglo [...] La Sala Cuarta está para vigilar el cumplimiento de la Constitución, no para enmendarle la plana”. Redacción (Editorial). “La Sala Cuarta”. En: *La Prensa Libre*. San José, C. R., jueves 24 de julio de 1997, p. 12.

Con respecto a estos nuevos límites establecidos por la reforma de 1989, existen varias posiciones teóricas: unas más a gusto que otras con los cambios. Por una parte se ha dicho que “es perfectamente legítimo y perfectamente necesario que la Jurisdicción Constitucional controle al Poder Legislativo, también en el aspecto de someterla al respeto a esos fines públicos que le fueron impuestos por el constituyente, que es como decir que le fueron impuestos por todos los costarricenses cuando le otorgamos el poder”. (Piza Escalante, 1993, p. 420). Sin embargo, recuérdese que la jurisdicción constitucional, tal como está diseñada ahora, no surge de la Asamblea Constituyente de 1949 sino del *poder constituyente derivado*. Sin pretensiones de entrar en la discusión teórica sobre *si este poder representa a todos los costarricenses*, lo cierto es que el Poder Legislativo –al aprobar la reforma política de 1989 y establecer la *nueva* jurisdicción constitucional– se impuso a sí mismo los controles que mejor quiso.

Otra posición ha indicado que: “La configuración de la Sala como órgano político, se observa con mayor propiedad en el ejercicio de su función de control de constitucionalidad de las leyes o disposiciones normativas [...], la Sala no se ha concretado a esclarecer las dudas sobre la constitucionalidad o no de la norma, sino que ha definido y sugerido la forma en que ésta debería quedar redactada [...]” (Fallas Vega, 1995, p. 82). No obstante, en *sentido estricto*, no se debe hablar de la Sala Constitucional como un “órgano político”; porque *formalmente* es un órgano jurisdiccional. Otro asunto es el poder político que pueda o deba tener y las consecuencias de sus resoluciones, tema ciertamente poco explorado hasta ahora.

Probablemente esta gran reforma política sería a la larga para el *constituyente*, parafraseando a Wilson y Handberg (1998), como abrir una caja de Pandora; tal vez no

llena de males, aunque sí al menos de sorpresas. Si bien la reforma que crea la Sala Cuarta establece un sistema *garantista* de la supremacía de la Constitución Política, también rediseña las atribuciones del *poder constituyente derivado*. Ahora que se ha erguido la Sala Constitucional como intérprete último de lo que dice el *Texto Político Fundamental*, las observaciones de procedimiento y de fondo que hace a la Asamblea Legislativa, al menos en el caso de las reformas constitucionales, favorecen la creación de normas congruentes con las demás disposiciones del *Estatuto Político*. Las correcciones que indique la Sala IV con respecto al procedimiento legislativo sí son vinculantes para la Asamblea y cabe la acción de inconstitucionalidad contra reformas a la *Carta Magna* que se tramiten de espaldas al procedimiento constitucional y reglamentario correspondiente. Con respecto a las observaciones de fondo, el sistema diseñado crea un *incentivo* para que los legisladores atiendan las recomendaciones de la Sala Constitucional. Y es que el *incentivo* apuntado es tan importante, que el Tribunal Constitucional ni siquiera requiere de declarar formalmente la inconstitucionalidad de una reforma al *Estatuto Político* para lograr su *inaplicabilidad*: basta con recurrir a sus amplias facultades interpretativas.

Dentro de las atribuciones con las que el legislador dotó a la Sala Constitucional, la consulta preceptiva de constitucionalidad en el trámite de las reformas a la *Carta Magna*, ha funcionado así como un verdadero *control político*. Nótese que aun cuando es facultativo para la Sala Constitucional referirse al fondo de las propuestas de reformas constitucionales, este Tribunal ha insistido en realizar este tipo de observaciones sobre los proyectos consultados. Si bien el legislador puede apartarse del criterio jurisdiccional sobre asuntos de fondo de los proyectos de reforma constitucional, en la mayoría de los casos el Parlamento ha prestado atención a las calificadas opiniones del tribunal especializado en la materia.

La consulta obligatoria de constitucionalidad previa a la aprobación definitiva de las reformas constitucionales es una institución bastante singular, adoptada por pocos países; pero que en el caso costarricense ha funcionado adecuadamente, en el tanto fortalece el sistema de frenos y contrapesos del Estado. Por una parte, evita anulaciones futuras de reformas constitucionales que no se hayan efectuado conforme a las disposiciones que regulan su trámite, mediante el examen previo de las cuestiones de procedimiento por el Tribunal Constitucional. Por otro lado, en cuanto a las observaciones de fondo que facultativamente realiza la Sala Constitucional, éstas constituyen un incentivo institucional para que los actores legislativos armonicen las nuevas normas con el resto del texto constitucional, cuya interpretación –en todo caso– es finalmente realizada por la misma Sala IV.

El procedimiento para las enmiendas constitucionales nunca estuvo sujeto a control alguno ajeno al Parlamento. Por lo cual, la creación en Costa Rica de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha significado, entre otras de sus muchas –e insistimos que muy poco estudiadas– **implicaciones políticas**, la instauración de un contrapoder a la función constituyente de la Asamblea Legislativa.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.<sup>14</sup>

Alba Navarro, Manuel (1982). “El recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de ley orgánica”. En: *Revista de Derecho Político*, N° 16, invierno 1982–1983, pp. 167–182. Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Alcántara Sáez, Manuel (1994). *Gobernabilidad, crisis y cambio*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1ª edición, 226 pp.

---

<sup>14</sup> Las referencias corresponden únicamente a los trabajos citados a lo largo del presente artículo. Para una bibliografía más extensa, vid.: <<http://www.geocities.com/exergo/biblios.htm>>.

Alcántara Sáez, Manuel (1990). *Sistemas políticos de América Latina*. Madrid, Editorial Tecnos, 1ª edición, Vol. II, 255 pp.

Álvarez Desanti, Antonio (2000). Ministro de Estado en la Administración Arias Sánchez (1986–1990), Diputado en el período 1994–1998 y Presidente de la Asamblea Legislativa (1995–1996). Entrevista realizada por Juan Carlos Rodríguez Cordero, en las oficinas de Antonio Álvarez Desanti en Goicoechea, C. R., el jueves 16 de noviembre de 2000, a las 11 hrs.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 8.484*. Proyecto de ley de reforma a los artículos 10, 48, 50, 95 inciso 7), 102 inciso 1), 106, 107, 109 incisos 5), 6) y 7), 110, 111, 112, 113, 117, 119, 121, 124, 128, 131, 132 inciso 5), 152, 157, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 180, y 185 de la Constitución Política.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 10.273*. Proyecto de ley orgánica de la jurisdicción constitucional.

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. *Expediente N° 10.401*. Proyecto de ley de reforma a los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política.

Castro Vega, Oscar (1996). *Figueres y la Constituyente del 49*. San José, C. R., Litografía e Imprenta LIL, 1ª edición, 464 pp.

*Constitución Política de la República de Costa Rica*, de 7 de noviembre de 1949. San José, C. R., Editorial Juricentro, 1ª edición (comentada y anotada por Rubén Hernández Valle), 1998, 504 pp.

Dabène, Olivier (1992). *Costa Rica: juicio a la democracia*. San José, C. R., Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), 1ª edición, 436 pp.

Fallas Vega, Elena (1995). “La Sala Constitucional: su naturaleza en el ejercicio de sus competencias en las acciones de inconstitucionalidad y en el recurso de amparo”. En: *Revista Parlamentaria*, Vol. 3, N° 3, diciembre de 1995, pp. 77–90. San José, C. R., Asamblea Legislativa.

Figueres Ferrer, José (1987). *El espíritu del 48*. San José, C. R., Editorial Costa Rica, 1ª edición, 387 pp. + ilustraciones fotográficas.

Georgetown University y Organización de Estados Americanos. Political Database of the Americas [Base de Datos Políticos de las Américas]. Washington, D. C. <[www.georgetown.edu/pdba/](http://www.georgetown.edu/pdba/)>.

Gutiérrez Gutiérrez, Carlos José (1993). «Evolución de la justicia constitucional en Costa Rica». Conferencia dictada en el “Seminario sobre Justicia Constitucional”, publicada en: AAVV. *La Jurisdicción Constitucional: III Aniversario de la creación de la Sala Constitucional*. San José, C. R., Editorial Juricentro, 1ª edición, Vol. I, 432 pp.

Hernández Valle, Rubén (1993). “El poder constituyente derivado y los límites jurídicos del poder de reforma constitucional”. En: *Revista Española de Derecho Constitucional*, año 13, N° 37, enero–abril de 1993, pp. 143–155. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

Jiménez, Mario Alberto (1992). *Desarrollo constitucional de Costa Rica*. San José, C. R., Editorial Juricentro, 4ª edición [prólogo y capítulo adicional de Carlos José Gutiérrez], 280 pp.

Lehoucq, Fabrice Edouard (1997). *Lucha electoral y sistema político en Costa Rica, 1948–1998*. San José, C. R., Editorial Porvenir, 1ª edición, 77 pp.

Lehoucq, Fabrice Edouard (1998). *Instituciones democráticas y conflictos políticos en Costa Rica*. San José, C. R., Editorial Universidad Nacional (EUNA), 1ª edición, 202 pp.

*Ley Constitucional de la República Francesa*, de 3 de junio de 1958. En: *Constituciones extranjeras contemporáneas*. Cascajo Castro, José Luis y Manuel García Álvarez, editores (1994). Madrid, Editorial Tecnos, 3ª edición, 305 pp. [incluye estudio introductorio y notas preliminares].

*Ley de la Jurisdicción Constitucional*. Ley N° 7.135 de 11 de octubre de 1989. Publicada en el Diario Oficial *La Gaceta*, N° 198 de 19 de octubre de 1989. San José, C. R.

Lizano, Ricardo, Mauricio Martínez y Dixie Mendoza (Redactores). “Ejecutivo presionará por Sala Cuarta”. En: *La Nación*. San José, C. R., sábado 3 de junio de 1989, p. 4 A

Lobo Solera, José Antonio (2000). Diputado en los períodos 1986–1990 y 1994–1998. Entrevista realizada por Juan Carlos Rodríguez Cordero, en las oficinas de la Presidencia de la República, en San José, C. R., el martes 21 de noviembre de 2000, a las 9:30 hrs.

Martínez, Mauricio (Redactor). “Comienza integración de Sala Cuarta”. En: *La Nación*. San José, C. R., jueves 7 de setiembre de 1989, p. 6 A.

Mavcic, Arne (2001). “The Powers of Constitutional Courts and Other Bodies of Constitutional Review Powers” [versión electrónica actualizada <Arne.Mavcic@us-rs.si> (23 de abril de 2001)]. Antes publicado como parte del capítulo cuarto del libro: Harutyunyan, Gagik y Arne Mavcic (1999). *Constitutional Review and its Development in the Modern World (A Comparative Constitutional Analysis)*. Yerevan–Ljubljana, Hayagitak, 1ª edición, 445 pp.

Mayorga, Armando (Redactor). “Inminente fracaso de la Sala Cuarta”. En: *La Nación*. San José, C. R., martes 23 de mayo de 1989, p. 6 A.

Mayorga, Armando (Redactor). “Asamblea aprobó Sala Cuarta”. En: *La Nación*. San José, C. R., martes 13 de junio de 1989, p. 5 A.

Oduber Quirós, Daniel (1985). *Raíces del Partido Liberación Nacional*. San José, C. R., Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL), 1ª edición, 412 pp.

Piza Escalante, Rodolfo (1993). «Los límites del Poder Legislativo». Mesa Redonda del “Seminario sobre Justicia Constitucional”, publicada en: AAVV. *La Jurisdicción Constitucional: III Aniversario de la creación de la Sala Constitucional*. San José, C. R., Editorial Juricentro, 1ª edición, Vol. I, 432 pp.

Piza Escalante, Rodolfo (1999). Magistrado (Presidente) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entrevista realizada por Agüero Rojas. Publicada en: Periódico *Al Día*. San José, C. R., domingo 10 de octubre de 1999, p. 8.

Redacción. “Escollos de una reforma”. En: *La Nación*. San José, C. R., sábado 3 de junio de 1989, p. 4 A.

Redacción. “Eligieron a magistrados de Sala Constitucional”. En: *La República*. San José, C. R., martes 26 de setiembre de 1989, p. 3 A.

Redacción (Editorial). “La Sala Cuarta”. En: *La Prensa Libre*. San José, C. R., jueves 24 de julio de 1997, p. 12.

Rodríguez Cordero, Juan Carlos (2001). *Las reformas constitucionales en el diseño del sistema político costarricense: el caso de la consulta preceptiva de constitucionalidad (1989–1997)*. Tesis para optar al grado académico de Magister Scientiae en Ciencias Políticas. San José, C. R., Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica, Programa de Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas, 211 pp. Hay edición publicada [bajo el mismo título] por: Bell & Howell Information and Learning–UMI, Ann Arbor, MI., 2002, 211 pp.

Rodríguez Vega, Eugenio (1981). *De Calderón a Figueres*. San José, C. R., Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2ª edición, 269 pp.

Sáenz Carbonell, Jorge Francisco (1985). *El despertar constitucional de Costa Rica*. San José, C. R., Asociación Libro Libre, 1ª edición, 1985, 564 pp.

Sáenz Carbonell, Jorge Francisco (1991). “Orígenes del control de constitucionalidad en Costa Rica (1812–1937)”. En: *Revista de Derecho Constitucional*, N° 1, enero–abril de 1991, pp. 27–64. San José, C. R., Corte Suprema de Justicia.

Sartori, Giovanni (1994). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*. Nueva York, New York University Press, 1ª edición, 219 pp.

Segura, William (Redactor). “El superpoder”. En: *La Prensa Libre*. San José, C. R., sábado 2 de agosto de 1997, p. 6.

Townsend Ezcurra, Andrés (1973). *Las Provincias Unidas de Centroamérica: Fundación de la República*. San José, C. R., Editorial Costa Rica, 1ª edición, 488 pp.

Wilson, Bruce M. y Roger Handberg (1998). “Opening Pandora’s Box: The Unanticipated Political Consequences of Costa Rican Legal Reform”. Ensayo presentado en la Reunión de la *Midwest Political Science Association*, Chicago IL., 23–25 de abril de 1998.